

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	ALFREDO ENRIQUE SANTOLAMAZZA ANGULO
DEMANDADO	PROMOTORA EL CAPIRO ALTO S.A.S.
INSTANCIA	SEGUNDA -APELACIÓN AUTO-
PROCEDENCIA	JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 03 017 2023 00044 01
	INTERNO 2023-060
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 084
TEMAS	EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA. INADMISIÓN Y RECHAZO. JURAMENTO ESTIMATORIO
DECISIÓN	CONFIRMA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor ALFREDO ENRIQUE SANTOLAMAZZA ANGULO a través de su apoderado judicial, frente al auto proferido por el JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN el día 17 de febrero de 2023 (Archivo digital 07. Primera Instancia), mediante el cual dispuso el rechazo de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial, el señor Alfredo Enrique Santolamazza Angulo promovió demanda en contra de la sociedad Promotora El Capiro Alto S.A.S. representada legalmente por José Nicanor Bernal Vélez en la que pretende se declare la existencia de un vicio oculto relacionado con la proyección de una vía terciaria que da cuenta el POT del Municipio de Rionegro, Antioquia, sobre los lotes No. 6 con Matrícula Inmobiliaria N° 020-202262 y 1/38 parte del lote No. 39 con Matrícula Inmobiliaria N° 020-202295, que impide el desarrollo urbanístico; por lo anterior, se declare resuelto el contrato de venta celebrado por las partes el pasado 1 de diciembre de 2020 ante el Notario Quince de Medellín mediante la Escritura Pública No. 11.668; se condene al demandando a pagar los perjuicios en

calidad de daño emergente, honorarios de arquitectura y gastos de obra por el valor de \$94.760.263 y que dicha suma de dinero sea indexada al momento de la condena; finalmente, solicitó que se obligue a los demandados al pago de las costas procesales (Archivo digital 03. Primera Instancia).

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, Despacho que por medio de auto de 06 de febrero del año en curso dispuso su inadmisión (Archivo digital 05. Primera Instancia), exigiendo, entre otros requisitos: *“Hacer el juramento estimatorio siguiendo rigurosamente lo preceptuado por el artículo 206 del C.G.P, toda vez que no se realizó, pese a que solicita una indemnización de perjuicios, de conformidad con el numeral 7 del artículo 82 ídem”*.

Dentro del término concedido para la subsanación, el apoderado de la parte demandante a través de correo electrónico remitió escrito mediante el cual pretendió cumplir las exigencias realizadas por el Despacho (Archivo digital 04. Primera Instancia).

En providencia del día 17 de febrero de 2023 (Archivo digital 07. Primera Instancia), el juzgado de primera instancia decidió rechazar la demandada considerando que la parte demandante no cumplió con todas las exigencias; como fundamento de su decisión expuso que en el juramento estimatorio no discriminó de dónde sale el daño emergente reclamado por un valor total de \$94.760.263; que el apoderado de la parte actora se limita a decir que dicho valor fue el pagado a diferentes proveedores, sin precisar por cuál o cuáles conceptos, a cuál o cuáles proveedores, el valor de cada producto o servicio, cómo fue la forma de pago, ni cuáles fueron las fechas en que se realizaron los servicios o se entregaron los productos.

II. LA IMPUGNACIÓN.

Frente al anterior proveído la parte demandante a través de su apoderado judicial, formuló recurso de apelación argumentando que, el artículo 206 del Código General del Proceso no exige que el juramento estimatorio se deba detallar al nivel de discriminar los conceptos de pago como lo pide el juez de

primera instancia, por lo que no le es dable extralimitar lo requerido por el legislador; además, que en ningún momento se viola el derecho de defensa del contradictor, toda vez que, al momento de responder la demanda puede presentar objeción o allanamiento total o parcial del juramento estimatorio tal como se presentó al momento de subsanar los requisitos (Archivo digital 08. Primera Instancia).

El 10 de marzo de 2023 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, concedió el recurso de apelación (Archivo digital 09. Primera Instancia); el que fue asignado para conocimiento de este Despacho el 24 del mismo mes y año, siendo procedente resolver de plano conforme lo establece el artículo 326 del C.G.P., previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

1. DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

A fin de garantizar la concurrencia de los presupuestos procesales y así evitar sentencias inhibitorias y nulidades que afecten la validez del trámite, tiene diseñado el estatuto procesal civil una actuación determinante, misma que refiere al estudio de admisibilidad de la demanda y funge como el primer control de legalidad del ruego de tutela judicial. Para el Juez dicha actuación comporta el ejercicio de un deber-poder que puede dar lugar a la admisión de la causa, a su inadmisión o a su rechazo.

Tanto la inadmisión como el rechazo tienen en común la no aceptación inicial de la demanda; no obstante, ambas figuras difieren ostensiblemente en sus efectos dado que la primera comporta el aplazamiento de la aprobación de libelo genitor, previa concesión de oportunidad para la subsanación de ciertos defectos; mientras que el rechazo supone el *definitivo* desprendimiento de la causa por parte de la autoridad judicial destinataria. Por supuesto que el rechazo puede estar precedido de la inadmisión de la demanda.

Sobre la materia que se viene destacando prevé el artículo 90 del Código General del Proceso:

Admisión, Inadmisión y Rechazo de la Demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.

2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.

3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.

4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.

5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.

6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.

7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

Los recursos contra el auto que rechace la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano.

En todo caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la presentación de la demanda, deberá notificarse al demandante o ejecutante el auto admisorio o el mandamiento de pago, según fuere el caso, o el auto que rechace la demanda. Si vencido dicho término no ha sido notificado el auto respectivo, el término señalado en el artículo 121 para efectos de la pérdida de competencia se computará desde el día siguiente a la fecha de presentación de la demanda.

Las demandas que sean rechazadas no se tendrán en cuenta como ingresos al juzgado, ni como egresos para efectos de la calificación de desempeño del juez. Semanalmente el juez remitirá a la oficina de reparto una relación de las demandas rechazadas, para su respectiva compensación en el reparto siguiente.

Parágrafo Primero. La existencia de pacto arbitral no da lugar a inadmisión o rechazo de la demanda, pero provocará la terminación del proceso cuando se declare probada la excepción previa respectiva.

Parágrafo Segundo. Cuando se trate de la causa prevista por el numeral 4 el juez lo remitirá al defensor de incapaces, para que le brinden la asesoría; si esta entidad comprueba que la persona no está en condiciones de sufragar un abogado, le nombrará uno de oficio. (Negrillas fuera del texto original)

Importa igualmente destacar que, con los mismos fines de saneamiento y eficacia del proceso, el referido Estatuto Procesal contempla en su artículo 82 el contenido de toda demanda, enunciando en 11 numerales los requisitos mínimos de forma que debe contener la misma, para que permita el impulso del proceso que conlleve luego a la posibilidad de proferir una decisión que estudie el fondo del asunto en la demanda contenida, el mencionado artículo es del siguiente tenor literal:

Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

1. La designación del juez a quien se dirija.
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.
4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.
- 7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.**
8. Los fundamentos de derecho.
9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.
10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.
11. Los demás que exija la ley.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos. (Negrillas fuera del texto original)

2. CASO CONCRETO.

En el presente caso, como se detalló en la parte expositiva, acontece que de los diferentes requisitos exigidos para la admisión de la demanda se encontraron irregularidades que dieron lugar a la inadmisión de la misma, de los cuales sólo fue echado de menos finalmente el relacionado con el juramento estimatorio por los perjuicios reclamados, que según concluyó el A Quo, no fue subsanado, procediendo entonces al rechazo de la demanda, al considerar que el daño emergente no está debidamente discriminado.

Revisado el expediente se observa que la parte demandante allegó al juzgado de primera instancia un escrito reservando un acápite con el cual pretendió subsanar la exigencia relacionado con formular adecuadamente el juramento estimatorio, así:

“De conformidad con lo establecido en el Artículo 206 del Código General del Proceso, estimo bajo juramento que la suma que adeuda los demandados a mi representada asciende a la suma de \$1'152.682.513, según los hechos de la demanda y los cuales se discriminan así:

- Lucro cesante: \$1'057.922.250 valor pagado por el demandante al demandando por el valor del inmueble.*
- Daño emergente: \$94.760.263 valor pagado por el demandante a diferentes proveedores, con el fin de iniciar la construcción en su lote. Lo anterior, sin perjuicio a la indexación o intereses que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda.”*

De la lectura del acápite transcrito, evidente resulta que no detalló los perjuicios que componen el daño emergente, lo que sí es necesario porque el artículo 206 aludido, es claro en señalar que quien pretenda el reconocimiento de una indemnización deberá estimar razonadamente la cifra que pretende recibir, lo que no significa algo distinto a que esta cifra debe estar precisada y basada en razones, argumentos, fundamentos o justificaciones, verificables o comprobables, exigencias que no se satisfacen con la generalidad aquí plasmada, sino que requiere que el juramento se lleve a cabo **discriminando cada uno de sus conceptos**, condicionamiento éste determinante para conocer y valorar el origen, alcance y contenido de la estimación, principalmente en los casos como el presente donde lo reclamado está integrado por varios conceptos.

Acorde con la anterior inteligencia es que la norma exige de la contraparte que la objeción **“especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación”**; interpelación ésta de imposible satisfacción si la

parte que realiza el juramento no atiende los criterios analizados en precedencia.

La doctrina nacional que con más agudeza ha analizado el instituto jurídico procesal que nos ocupa ha sostenido:

En síntesis, el texto de la norma exige que la estimación sea “razonada”, y que haya discriminación “de cada uno” de los conceptos.

De otro lado, el numeral 7° del artículo 82 del CGP establece que salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá contener “7. *El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*” Por lo tanto, la demanda debe inadmitirse si no se hace el juramento estimatorio o si este es precario o insuficiente, esto es, cuando el juramento no ofrece la relación discriminada de los distintos rubros que configuran la reclamación. De este modo, si el juramento estimatorio no está debidamente razonado, o si no hay discriminación en detalle de cada uno de los factores constitutivos de los perjuicios reclamados, de las mejoras o de otras fuentes de indemnización, el juez deberá exigir al demandado que haga la relación especificada y detallada de los valores pretendidos. En verdad la seriedad y consistencia del juramento estimatorio facilitará la gestión del proceso en muchos aspectos, pues esa descripción detallada auspicia en primer lugar que el demandado adopte una posición ante la reclamación. (...) En buena medida, el nivel de detalle del juramento estimatorio permite un mejor ejercicio del derecho de defensa, pues no es fácil para el demandado oponerse a un juramento en el cual se invoca una cifra genérica, sin el detalle necesario y sin conocer los distintos elementos integrantes de la pretensión indemnizatoria, que podrían conducirlo a una conducta de no objeción.¹

Valga acotar también lo dicho por la Corte Constitucional en sentencia C 157 de 2013 respecto de dicha institución:

“Señalar la cuantía, por la vía del juramento estimatorio, cuando sea necesario, o por la vía de su estimación razonada, es uno de los requisitos de la demanda, al tenor de lo previsto en el artículo 82[9], numerales 7 y 9. Este requisito no es un mero formalismo, pues guarda relación con un medio de prueba y, en todo caso, es necesario para determinar la competencia o el trámite. Por lo tanto, señalar la cuantía no es un requisito prescindible o caprichoso, sino un presupuesto necesario para el trámite del proceso.

Si en la demanda o en su contestación, la parte o su apoderado, o ambos, suministran información que no corresponda a la verdad, en el artículo 86 se prevé que habrá lugar a remitir las copias pertinentes para los procesos penales y disciplinarios, a imponer una multa y a

¹ VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. El Juramento Estimatorio en el Código General del Proceso. En: XXXV Congreso Colombiano de Derecho Procesal (Cartagena – Colombia, 10, 11 y 12 de Septiembre de 2014). Bogotá: Universidad Libre – ICDP, 2014. Páginas 127 a 147.

condenar a una indemnización de perjuicios. Así, la falta de rigor con la veracidad de la información aportada, genera consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales.

(...)

Por razones de probidad y de buena fe se exige, por ejemplo, que el demandante obre con sensatez y rigor al momento de hacer su reclamo a la justicia, en especial en cuanto atañe a la existencia y a la cuantía de los perjuicios sufridos. Como se ilustró atrás, no se trata de un mero requisito formal para admitir la demanda, sino que se trata de un verdadero deber, cuyo incumplimiento puede comprometer la responsabilidad de la parte y de su apoderado.

Por las mismas razones se permite que la parte estime de manera razonada la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y se reconoce a esta estimación como un medio de prueba que, de no ser objetada, también de manera razonada, o de no mediar una notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena. Esto quiere decir que basta con la palabra de una persona, dada bajo juramento, para poder tener por probada tanto la existencia de un daño como su cuantía”.

Acorde con lo estudiado en precedencia, el juramento estimatorio constituye un medio de prueba frente a los conceptos reclamados por el demandante, el cual, conforme al principio procesal de contradicción, debe ser conocido por la contraparte para que, en caso de no estar de acuerdo, ésta pueda objetarlo y aportar las pruebas que considere necesarias para desvirtuarlo; por ende, mal haría el juez en no exigir la presentación adecuada de dicho medio de prueba respecto del valor reclamado como daño emergente, porque de no hacerlo vulneraría el derecho de defensa de la parte demandada, quien no podría objetarlo con el detalle que le exige la norma procesal.

Por lo anterior, se concluye que no tiene asidero el reclamo del recurrente, esto es, su insistencia en que el juramento estimatorio se presentó debidamente, siendo ello suficiente para concluir que, el escrito genitor no cumple a cabalidad con los requisitos formales exigidos por el actual estatuto procedimental colombiano.

De manera que, asistiéndole razón al Juzgado de primera instancia en una de las exigencias efectuadas en el auto inadmisorio de la demanda, detalladas en esta providencia y, la cual está encaminada a obtener una demanda en forma que permita el curso del proceso para llegar a la

definición del asunto con un fallo de mérito y, ante el incumplimiento de la misma, procedía el rechazo de la causa, como en efecto se decidió en la providencia recurrida, la que será confirmada en esta instancia.

3. COLOFÓN Y COSTAS.

Como en definitiva no se cumplieron los requisitos exigidos en el auto inadmisorio de la causa, procedía el rechazo de la presente demanda, y por ende la **CONFIRMACIÓN** en esta instancia del auto apelado.

No obstante, la resolución de la instancia ser negativa para la parte recurrente, no habrá lugar a imponer condena en costas, toda vez que no se causaron. Lo anterior atendiendo la regla 8 del artículo 365 del Código General del Proceso.

Por lo expuesto, la **suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha 17 de febrero de 2023 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se dispuso el rechazo de la demanda de la referencia, por las razones expuestas.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del C.G.P. y la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:
Martha Cecilia Ospina Patiño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 007 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3e0a3a1046ff387b896de21447e73470616a8ec89ab08ce98ded3e7800018ac0**

Documento generado en 08/06/2023 04:25:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>